

EL ESPECTADOR

FUNDADO EN MEDELLÍN EN 1887 POR FIDEL CANO

El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Consejo Editorial

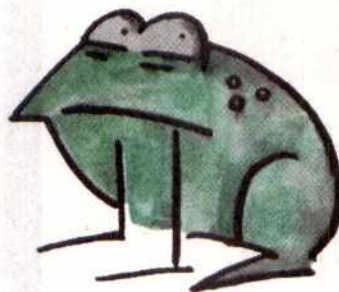
Presidente Gonzalo Córdoba Mallarino

Pilar Reyes, Héctor Abad Faciolince, Ramiro Bejarano, Armando Montenegro.

Editor General Jorge Cardona

Vicepresidente Comercial Caracol Unidad de Medios Mauricio Umaña Blanche

123
ENCANTADO
GOLLA



P
H
Z

Opinión

Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fidelcano@elespectador.com

El Espectador. Editado por Comunican S.A. ©. Miembro: SIP, WAN, IPI y Andiaros © Comunican S.A. 2016. Todos los derechos reservados. ISSN 0122-2856. Año CXXIX. www.elespectador.com

Las aspersiones fallidas

EN UNA CARTA DEL FISCAL, Néstor Humberto Martínez, al ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, se pide convocar a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Estupefacientes —encargado de definir la política antidrogas del país— y se describe un preocupante diagnóstico de la guerra contra los cultivos ilícitos. Sin embargo, nos parece que la solución propuesta por el fiscal, de considerar la reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato, es volver a priorizar los paños de agua tibia sobre los remedios necesarios y complejos que amerita el tema.

La misiva de la Fiscalía habla de la necesidad de “evaluar la política vigente de erradicación de cultivos ilícitos”, pues “existen informes que dan cuenta que las hectáreas de coca sembradas podrían superar las 100.000”. Hasta ahí es imposible no estar de acuerdo con el fiscal Martínez.

El diagnóstico llama la atención sobre cómo el narcotráfico se consolida como el enemigo más complicado para el futuro de Colombia. Las protestas y los bloqueos de la población campesina cocalera (345 movilizaciones), las minas antipersona y las municiones sin explotar en las zonas de erradicación, las enfermedades tropicales y la disminución de los grupos móviles de erradicación (de 900 a 200) son los motivos para que los procesos de erradicación manual, priorizados desde que se suspendieron las aspersiones aéreas con glifosato, no sean suficientes para reducir

los cultivos. También, dice la Fiscalía, el microtráfico nacional se ha consolidado como un mercado rentable, lo que llena de “combustible” la inseguridad en las ciudades.

Son, entonces, dos tipos de problemas: primero, uno social, pues las comunidades que han encontrado algo de bienestar gracias al cultivo de cocaína no sienten que el Estado les esté dando suficientes alternativas para abandonar la rentable ilegalidad, y, segundo, uno de orden público, ya que hay grupos de criminales que amenazan la seguridad nacional financiados por el narcotráfico. Ya lo dijimos cuando el frente Primero de las Farc anunció que no se desmovilizaría: con la desaparición de esa guerrilla quedarán sin máscara política varios grupos armados que en realidad lo que quieren es seguir viviendo de la coca.

Dicho lo anterior, y respaldando la idea de que no se está haciendo lo suficiente para enfrentar el problema de raíz, nos separamos de la propuesta del fiscal de “considerar la conveniencia de reanudar la aspersión aérea”. La razón

“La reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato, es volver a priorizar los paños de agua tibia sobre los remedios complejos que amerita el tema”.

está en el mismo diagnóstico de la Fiscalía: los obstáculos no se deben a que no estemos utilizando el glifosato de esta manera.

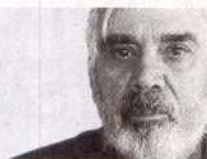
Según el Observatorio de Drogas de Colombia, en el año 2002 había 102.071 hectáreas de coca. En el 2015 había 96.084. En ese mismo período se fumigaron 1'546.802 hectáreas y se erradicaron manualmente 471.807. Es decir, más de dos millones de hectáreas fueron fumigadas y erradicadas, para una reducción de sólo 6.000 hectáreas. En cambio, si hay dudas sobre los efectos en la salud de los campesinos causados por las aspersiones, así como son conocidas las molestias que este mecanismo ha generado en los países vecinos, como Ecuador. Esto, además, sin hablar de que fumigar desde el cielo continúa saboteando los procesos de acercamiento con las comunidades cocaleras, que lo que piden a gritos no es más guerra, sino colaboración directa del Estado para encontrar otros medios de subsistencia.

Hay que hacer algo y el Gobierno tiene que aceptar los hechos sobre el fracaso de su estrategia, pero reanudar las aspersiones es un paño de agua tibia que, además de ir en contravía de lo pactado con las Farc, propone seguir poniendo en peligro la salud de los colombianos a cambio de una estrategia que ha mostrado su ineficiencia.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Predial y catastro

SALOMÓN KALMANOVITZ



EL MAPA DE LA COBERTURA CATAS- tral en Colombia muestra vacíos enormes: Nariño, Vichada, Casanare y Caquetá, en general todos los teatros del conflicto, no cuentan con identificación de predios ni de sus linderos. Eso dificulta el desarrollo económico de predios obtenidos mediante la violencia o que son baldíos. Ni siquiera el Estado colombiano cuenta con un inventario de sus propiedades. Esta ausencia de conocimiento paraliza incluso las grandes inversiones que algunos grupos privados quieren adelantar en la Altillanura. Planeación Nacional sólo ha hecho un estudio sobre catastro e impuestos, y ni siquiera está colgado en la red.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) tiene grandes falencias técnicas y de presupuesto que impiden que entregue una buena información sobre el valor de los predios. Mientras que la Superintendencia de Notariado y Registro tiene un presupuesto de medio billón de pesos, el IGAC

no alcanza a \$150.000 millones. Cuenta con un avión para hacer aerofotografía, pero lo alquila a terceros para completar su exiguo presupuesto y no para sus fines misionales. Sus funcionarios están mal pagos y no cuentan con suficiente capacitación para hacer bien su tarea. A los municipios les cobra por elaborar sus catastros, y a estos no les resulta rentable adelantarlos. En 2014, el catastro descentralizado que llevaron a cabo Bogotá, Antioquia y Cali recaudó el 62 % de los impuestos prediales del país, mientras que el IGAC hizo la cobertura para el resto del territorio. El predial promedio del sistema descentralizado fue de \$560.000, mientras que el del IGAC fue de \$200.000; aunque hay diferencias de riqueza, estas no explican la diferencia tan grande.

El atraso de los avalúos en el resto del territorio se extiende por más de 20 años, impidiendo que sus municipios puedan contar con ingresos suficientes. Pero su problema mayor es que los grandes propietarios que pueden pagar altos impuestos controlan los concejos municipales, que dictan la normas y tasas del predial. Tal situación favorece a todos los propietarios, grandes y pequeños: a nadie le interesa pagar impuestos, que son la base del progreso municipal. Por esa razón, el re-

caudo del predial lo debería hacer la DIAN, que contaría con la información catastral actualizada y cruzada con el registro que hace la Superintendencia de Notariado y Registro. Una vez cobrado el predial se le reintegraría al municipio, descontando los costos de su administración, tal como se hace en Chile.

El nuevo catastro debería contar con modelos geométricos con que actualizar el avalúo anualmente con valores cercanos a los comerciales. Contar con una actualización automática ha permitido que Bogotá recaudara más de \$2 billones en 2014 y \$2,4 billones en 2016. Lo que muestran estos datos es que las ciudades no tienen problema a la hora de organizar su catastro y recaudar recursos, mientras que en el campo está todo por hacerse. Es por eso que el nuevo catastro debe focalizarse en avanzar la cobertura catastral rural y no combinarla con la urbana, que justificará no hacer ninguna.

Es necesario también que se consulte a la comunidad y a los vecinos de cada predio rural para evitar litigios, algo que no contempla el plan del nuevo catastro. Se hace imperativo que se condicione cualquier transacción inmobiliaria con la actualización de la cédula catastral y que el propietario pudiese pagar por ella.

Nieves



Es mejor ser bonita que fea.